

Estrategia modernizante y perfil del movimiento campesino contemporáneo

EMILIO GARCÍA

EL MOVIMIENTO CAMPESINO ACTUAL en México es producto, por una parte, de la crisis agrícola que el país viene arrastrando desde mediados de la década de los sesenta y, por la otra, del creciente y cada vez más descarnado antiagrarismo de los gobiernos posteriores al régimen cardenista.

En 1965 se inició el resquebrajamiento de un modelo de desarrollo que por un cuarto de siglo facilitó el crecimiento y consolidación del sector industrial, gracias a los excedentes agrícolas exportables, a la abundancia de mano de obra y materias primas baratas aportadas por el campo.

Las bases estructurales de dicho modelo, así como la creación de un vasto mercado interno, fueron la herencia del sexenio cardenista que terminó por ser dilapidada por los gobiernos posteriores, con el consiguiente deterioro de los niveles de bienestar de la gran masa de pequeños productores rurales y de las clases populares en general, quienes sufrieron con mayor dramatismo los efectos de la pérdida de la autosuficiencia en granos básicos y la caída estrepitosa de los precios internacionales de productos agrícolas aún excedentarios como el algodón.

La cada vez más aguda crisis del sector agropecuario, la represión oficial y la violencia caciquil contra los campesinos sin tierra, más otros factores coyunturales, convirtieron el campo mexicano a principios de la década de los años setenta en un enorme barril de pólvora a punto de estallar.

1. CUANDO LOS MARGINALES SE COLOCARON EN EL CENTRO

A lo largo de la década de los setenta, se produjo en el país una oleada de pequeñas, medianas y grandes movilizaciones de pequeños grupos de solicitantes o comunidades que reclamaban la restitución de sus tierras en manos de caciques y terratenientes. Las organizaciones regionales que impulsaron ocupaciones en varios estados, se sumaron a una más vasta constelación de luchas campesinas en la mayor parte del territorio nacional, que pronto pasaron de la marginalidad a un protagonismo de resonancia nacional e internacional.

Las formas de lucha y de protesta se diversificaron: ocupaciones de latifundios, tomas de oficinas públicas, caravanas, huelgas de hambre, bloqueos de carreteras, etcétera. Estados como Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala y el propio Distrito Federal, fueron escenarios de esas movilizaciones campesinas. De alguna manera la gran diversidad de acciones de protesta y denuncia, las gestiones y negociaciones que tuvieron lugar durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), fueron un factor que obligó al régimen a desempolvar el gastado atuendo agrarista para presentarse como “neozapatista”, y recuperar así legitimidad y capacidad de diálogo privilegiado con el campesinado. La acción gubernamental más espectacular de la década fue el decreto de expropiación de 110 000 hectáreas en los valles del Yaqui y Mayo en Sonora, que Echeverría expidió los últimos días de su mandato. De esta lucha triunfante por la tierra surgió la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y Mayo, en 1978.

A partir del sexenio de José López Portillo el discurso “agrarista” volvió a archivarse. A 75 años de la reforma agraria el gobierno ya no quería hablar de reparto. En 1979, para “conmemorar” el centenario del nacimiento de Emiliano Zapata, se anunció el fin del reparto agrario y se comenzó a izar la “bandera blanca” en varios estados como señal de que el rezago de expedientes agrarios estaba definitivamente resuelto. La “alianza” de los campesinos con el Estado se ubicó, básicamente, en el terreno de la producción, para lo cual el gobierno contaba con recursos financieros provenientes del auge petrolero, que le permitirían manipular la inversión en el campo favoreciendo prioritariamente a la burguesía rural.

Ante esta situación, la reacción de los numerosos grupos de campesinos en lucha fue la de avanzar en procesos de unidad regional y nacional para enfrentar la política antiagraria y anticampesina del régimen. En octubre de 1979 surgió la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), organización que aglutina principalmente al campesinado pobre, es decir, a solicitantes de tierra, ejidatarios y comuneros despojados de sus tierras o que defienden las que todavía poseen.

Desde su posición independiente y autónoma, respecto del Estado y los partidos políticos, la CNPA cuestionó las diferentes políticas, ordenamientos jurídicos y programas del régimen de José López Portillo que tenían que ver con el campo (Alianza para la Producción, Sistema Alimentario Mexicano, Padrón Nacional Campesino, Ley de Fomento Agropecuario).

Sectores de la intelectualidad más comprometida contribuyeron a fundamentar los cuestionamientos de la política agraria del Estado por parte de la CNPA, abriendo espacios para la reflexión, el intercambio de experiencias y el debate entre las organizaciones campesinas regionales y nacionales. Chapingo, la UNAM, la UAM y otros centros de educación superior y de investigación fueron escenarios de foros, congresos y encuentros que enriquecieron y sistematizaron el pensamiento agrarista y fortalecieron la unidad de un nuevo movimiento campesino.

Ante el anuncio oficial del fin del reparto agrario, precisamente al cumplirse 100 años del nacimiento de Zapata, y en medio de una creciente ola represiva y de violencia en el campo, la CNPA representó las aspiraciones de millones de campesinos sin tierra y una opción no sólo para el campesinado pobre no organizado, sino también para sectores que estaban abandonando progresivamente las organizaciones oficiales, ante su ineficiencia, corrupción y subordinación al PRI y al gobierno.

La CNPA inauguró una estructura horizontal de relación, basada en el respeto a la autonomía de cada organización local o regional. Las propuestas de acción unitaria se discutieron en las bases de cada organización o grupo y la decisión de éstos se llevó a las plenarios nacionales donde prevalecería el consenso como método para la toma de decisiones. La gestoría y las negociaciones con el gobierno fueron transparentes y participativas.

Con los anteriores mecanismos de toma de decisiones se realizó el 12 de mayo de 1981 la primera gran marcha nacional campesina con el apoyo solidario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras organizaciones de masas. La llegada al Zócalo de la ciudad de México de millares de campesinos encabezados por ex combatientes del Ejército Liberador del Sur, que exigían el cumplimiento del Plan de Ayala —e impidieron el traslado de los restos de Zapata de Cuautla al Monumento a la Revolución—, marcó, sin duda alguna, la ruptura con la política agraria oficial, el rescate del símbolo y el ideario zapatista y el principio de la quiebra del corporativismo oficial en el campo.

De 1981 a 1984, la CNPA se convirtió en la fuerza campesina más significativa del país, con presencia en la mayoría de los estados, vinculada a otras coordinadoras nacionales (CNTE y CONAMUP*), y con capacidad de diálogo con el gobierno y de convocatoria frente al resto del movimiento popular independiente.

Tan sólo en su primer año de vida (1979-1980), la CNPA realizó tres encuentros nacionales y decenas de encuentros regionales. A lo largo de diez años de movilización combativa, la CNPA organizó innumerables acciones locales, seis encuentros y tres congresos nacionales, varios foros, conferencias y talleres de capacitación.

Actualmente integran la coordinadora unas 20 organizaciones regionales, localizadas en 15 estados de la República. Si bien es una de las organizaciones campesinas menos favorecidas por la actual política concertadora del salinismo —por su pasado contestatario, su radicalismo y su limitada experiencia en la elaboración de proyectos económicos—, se trata de una de las agrupaciones que ha mantenido con mayor firmeza su carácter independiente y autónomo ante el Estado y las corrientes políticas. Hoy combina la concertación con la movilización a nivel local y nacional.

* Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular.

La CNPA no logró elaborar un programa agrario alternativo —ninguna organización campesina lo logró, ni siquiera la CNC con más de medio siglo de vida—, y tampoco consiguió triunfos importantes en su obstinada lucha por la tierra; sin embargo, aportó algunas experiencias que el movimiento campesino y popular debería rescatar, como por ejemplo su persistente defensa de la comunidad agraria no sólo como unidad económica, sino como entidad jurídica, social e histórica que es básica en la cultura y organización de la sociedad rural mexicana, así como su estructura organizativa horizontal y la autonomía regional.

Quizá el aporte más importante de la CNPA a la lucha social mexicana ha sido el rescate del símbolo del zapatismo y el haber impedido la pretensión gubernamental de sepultar para siempre la reforma agraria, poniendo fin al reparto territorial.

En la actual coyuntura de modernización salinista, la disyuntiva real de la CNPA es: mantenerse como un proyecto contestatario y marginal, o bien convertirse en una organización social políticamente madura y abierta a los nuevos tiempos que, sin perder su autonomía, sea capaz de crecer y desarrollarse en un nuevo terreno de lucha.

2. EL CAMPESINADO MEDIO ENTRA EN ESCENA

Evidentemente, el protagonismo y los escenarios de lucha del campesinado mexicano han estado determinados por la dinámica y la orientación que sigue la acumulación capitalista en el campo y por la tendencia cada vez más anticampesina de la política del Estado. La respuesta campesina casi siempre ha sido defensiva, por más radicales que sean sus acciones. En el caso de la lucha por la tierra de los últimos 50 años posteriores al cardenismo, los logros reales obtenidos han sido muy pobres en comparación con el desgaste y las pérdidas humanas causadas por la represión. No obstante, la tierra sigue siendo una demanda tan irrenunciable e histórica como vital para el campesinado.

Varios investigadores del sector agropecuario (Armando Bartra, Luisa Paré, Blanca Rubio, Beatriz Canabal, Úrsula Oswald) coinciden en que durante la década de los setenta, los actores principales de la lucha en el campo fueron los jornaleros y campesinos pobres en regiones agrícolas atrasadas, mientras que a partir del agravamiento de la crisis económica (1982-1983), son los campesinos medios quienes aparecen como el sector más activo y movilizad en aquellas regiones en que la agricultura está más desarrollada, o donde los sectores por líneas de producción están más articulados, como es el caso de los maiceros, sorgueros, cafetaleros y productores de hortalizas.

Asimismo, en el primer período las demandas fueron muy diversas y heterogéneas (tierra, servicios, crédito, alto a la represión, defensa de recursos naturales), lo cual dificultó una articulación y coordinación amplia y estable. Las acciones emprendidas generalmente fueron protestas, denuncias, peticiones

aisladas y se utilizó un discurso contestatario. En la década de los ochenta, por el contrario, aunque las demandas siguieron siendo diversas y heterogéneas, las acciones de protesta se plantearon objetivos más concretos (negociaciones con autoridades, aumento de precios de garantía, afectaciones de tierra en áreas precisas, intervención de las organizaciones campesinas en el gabinete agropecuario con propuestas relacionadas con la planificación del sector, etcétera); el discurso fue más propositivo que contestatario, y la confrontación fue cediendo paso a la concertación.

En este nuevo terreno impuesto por el Estado, desde principios de los años ochenta, la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y Mayo, junto con otras organizaciones de productores de varias entidades del país, inició un proceso de convergencia que culminó con el surgimiento, en 1985, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), que agrupa a unas 25 organizaciones de productores regionales de todo el país. En la UNORCA participan importantes organizaciones de productores ejidales excedentarios, vinculados al mercado exterior.

El hecho de que en la UNORCA participen organizaciones independientes y organizaciones miembros de la CNC, explica una estrategia que no sólo corresponde a su heterogeneidad política, sino también a los sectores rurales que representa. Aunque la mayoría de las organizaciones que la integran han utilizado formas de acción y de protesta tan radicales como tomas de oficinas agrarias y sucursales de Banrural, y bloqueos de carreteras, a nivel nacional sus acciones de denuncia, gestoría y protesta se han canalizado más a través de vínculos y negociaciones con funcionarios de dependencias federales, que mediante la movilización masiva de los campesinos.

Las demandas principales de la UNORCA son: mejores precios de garantía, crédito, apoyo del Estado a la apropiación campesina del proceso productivo, comercialización y abasto, dotación de infraestructura al campo y diversos servicios.

Tanto por el carácter de sus demandas como por su capacidad de negociación, la UNORCA se convirtió en poco tiempo en la organización campesina con mayor membresía. Las organizaciones de productores rurales que asistieron a su II Encuentro Nacional celebrado en agosto de 1988, alcanzaron la cifra de 75, procedentes de unos 20 estados de la República. La UNORCA cuenta en sus filas con decenas de uniones de ejidos, Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARICs), consejos de abasto, cooperativas, etcétera. En 1989 logró el registro de 11 uniones de crédito, con las que incursionó audazmente en el difícil campo financiero de los sectores público y privado.

Lo anterior muestra que la lucha de las organizaciones de pequeños y medianos productores rurales, si bien es conflictiva, es menos antagónica frente al Estado que la que sostienen los que luchan por la tierra.

El hecho de que la capacidad de diálogo de la UNORCA con el Estado contraste con la de varias organizaciones campesinas independientes, hizo que algunas agrupaciones regionales de la CNPA consideraran a la UNORCA como fruto de un

proyecto gobiernista con el que no debía pactarse ninguna alianza. Esta reticencia fue superada por la CNPA y otras organizaciones al convocar conjuntamente al Encuentro Nacional Agrario los días 28 y 29 de noviembre de 1988, que culminó con la firma del Convenio de Acción Unitaria (CAU).

Ciertamente, hoy en día la UNORCA es la organización más beneficiada por la política de concertación del salinismo. Es posible que varias de las organizaciones regionales que la integran sigan el camino de la Coalición de Ejidos Colectivos del Valle del Yaqui y se incorporen a la CNC pero, independientemente del futuro político de la UNORCA, es notable su experiencia y su aporte en el terreno de los proyectos productivos y del financiamiento al desarrollo rural, así como su experiencia en el campo de la comercialización nacional e internacional, en una coyuntura caracterizada por la reprivatización del campo, y por el repliegue del Estado en tareas de apoyo al sector social.

La UNORCA enfrenta dos grandes retos: definir y fortalecer su autonomía frente al Estado, y articularse con sectores del campesinado pobre y del proletariado agrícola. La existencia de trabajadores rurales de infrasubsistencia o sin tierra dependientes del trabajo a jornal, y la lucha por el reparto territorial y los derechos laborales, son aspectos de la realidad agraria que deben vincularse con los campesinos territorializados y con su combate por la producción y el desarrollo integral.

3. CRISIS DE LAS CENTRALES Y PROYECTOS UNITARIOS

Los cambios de escenario de la lucha campesina impuestos por el Estado y la burguesía rural; el desgaste por largos años de movilizaciones poco fructíferas; las escisiones por diferencias políticas y la represión, han sido factores de reflujo y crisis en la mayoría de las organizaciones campesinas. Aun antes del parteaguas del 6 de julio de 1988, varias centrales y coordinadoras ya venían arrastrando crisis de unidad interna o estancamiento organizativo.

La CNPA, que había creado expectativas como polo aglutinador del campesinado, como una opción diferente a la de las centrales oficiales sufrió, en 1984, su primera escisión con la separación de la Unión de Comuneros "Emiliano Zapata" de Michoacán, por diferencias respecto a la política de alianzas. La UCEZ y otras organizaciones regionales no estaban dispuestas a marchar el 10 de abril al lado de la CIOAC, la UNORCA o cualquier otra organización campesina ligada a un partido político. En 1986, organizaciones miembros de la CNPA, bajo la hegemonía del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), abandonaron la coordinadora argumentando que la autonomía de las organizaciones regionales obstaculizaba su avance, y optaron por la formación de una nueva central, la Unión General Obrero, Campesina y Popular (UGOCP).

En la actual coyuntura, la UCEZ es una de las organizaciones regionales más golpeadas y aisladas del resto del movimiento campesino independiente. En varias ocasiones se observó una alianza estrecha entre la UCEZ y la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI) —otro desprendimiento de la CNPA—, que hizo de la huelga de hambre un medio para la solución de demandas que se fue desgastando, pero eficaz para la publicidad de sus dirigentes quienes, por lo demás, son conocidos negociadores de cúpula, defensores de un etnicismo pedestre y folclorista, con un discurso tan radical como simulado.

Otro sector del campesinado que se reivindicaba como parte de la CNPA, estaba encabezado por el Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata” (FDOMEZ), organización constituida mayoritariamente por indígenas de la región huasteca, y fuertemente golpeada por el gobierno y los terratenientes, lo cual explica su estructura semiclandestina, su constante movilización y un discurso contestatario y ultraradical que la han aislado del resto de las agrupaciones de masas del campo y la ciudad.

Organizaciones como la UNORCA, la UGOCP y la CIOAC han logrado una importante presencia nacional gracias a su intensa actividad concertadora con el régimen actual. Los recursos financieros pactados con las instituciones gubernamentales seguramente les han permitido un considerable crecimiento de su membresía, pero ello, por sí mismo, no es garantía de un desarrollo cualitativo y una formación política de las bases. Tarde o temprano surgirán “cuellos de botella” o crisis de unidad interna ante presiones institucionales, por ejemplo. Esas contradicciones deberán enfrentarse con madurez democrática, con apego a principios y una correcta metodología; de lo contrario, la unidad interna puede deteriorarse y producirse una pérdida parcial o total de la autonomía de la organización.

La lucha por la unidad y la autonomía del movimiento campesino mexicano siempre ha enfrentado muchas dificultades y tropiezos. No obstante, esa lucha continúa.

Desde finales de 1988 asistimos a un importante período de reagrupamiento del movimiento campesino mexicano, en el marco de la “modernización rural” y la concertación política anunciadas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En diciembre de 1988, diez organizaciones campesinas independientes (UNORCA, CIOAC, CNPA, UGOCP, UNTA, FDCCH, CODUC, CCC, CNPI y MNPA), realizaron un encuentro nacional agrario, después del cual firmaron el Convenio de Acción Unitaria (CAU), cuyos ejes fueron la lucha por la apropiación del proceso productivo, mejores precios de garantía, la lucha por la tierra y contra la represión en el campo. Poco después, el gobierno salinista, a través de la CNC, la SRA y la SARH, convocó a la constitución del Congreso Agrario Permanente (CAP), al que se incorporaron las centrales campesinas oficiales y la mayoría de las organizaciones firmantes del CAU, con la esperanza de convertir el congreso en un espacio plural de negociación con el Estado con objeto de intervenir, a través de él, en las decisiones políticas y económicas gubernamentales relacionadas con el desarrollo rural.

El CAP quedó integrado por 12 agrupaciones campesinas: siete oficiales (CNC, CCI, UGOCM, CAM, Movimiento de los 400 Pueblos, ACN y CCC) y cinco integrantes del Convenio de Acción Unitaria (CIOAC, CODUC, UGOCP, UNORCA y UNTA).

De las organizaciones campesinas independientes que firmaron el CAU, sólo la CNPA y el FDC de Chihuahua no se integraron al CAP, no obstante lo cual han abierto canales de negociación con distintas instancias del Estado.

A los dos grandes polos anteriores de agrupamiento del campesinado hubo que agregar un tercero: el de la Unión Campesina Democrática (UCD), que a partir de agosto de 1989 ha sido impulsada por una fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Varias organizaciones como la CIOAC, la CNPA y la UGOCP saludaron el nuevo proyecto y manifestaron su deseo de que la nueva central formara parte de un frente como el CAU y que no cayera en prácticas corporativistas, aun cuando se dieran desde un partido de izquierda como el PRD.

A la fecha, ninguno de los tres grandes polos de unidad y coordinación se ha consolidado ni puede considerarse el principal representante del movimiento campesino mexicano. El CAU, que agrupó a las principales organizaciones campesinas independientes, no obtuvo, desde su nacimiento, el impulso de sus integrantes para la realización de acciones unitarias. Ahora bien, si las organizaciones regionales más combativas lo revitalizaran, podría convertirse en el frente de masas que representara una alternativa al CAP; de no darse esta posibilidad, el proyecto quedaría sólo como un buen propósito.

Aunque el CAP ha mostrado un notable protagonismo en las negociaciones, en la firma de convenios de concertación y en actos legitimadores del actual régimen, la presencia y el peso de las organizaciones oficiales, interlocutoras privilegiadas del gobierno salinista, limitan cualquier acción conjunta que vaya más allá de pronunciamientos formales sobre la política agropecuaria o respecto a burdos actos de represión.

El CAP, en tanto propuesta del Estado, no puede representar el consenso de la mayoría de los sectores campesinos, a menos que la base de las organizaciones oficiales, y aun de las independientes, logran una transformación democrática y participativa que rompiera las estructuras verticales y centralistas y desplazara tanto a los dinosaurios corporativistas oficiales, como a los de izquierda.

Sobre la UDC sólo podemos anotar que se trata de un proyecto que no maduró por no contar con el consenso de los diferentes agrupamientos campesinos dentro del PRD. Desde sus inicios, en agosto de 1989, fue criticada la concepción corporativa que caracterizó a sus principales impulsores. Ello no invalida la posibilidad de que el PRD impulse un proyecto de agrupación campesina, siempre que dé prioridad a su carácter de organización social y que no se trate de un "brazo campesino" corporativizado del partido.

Por todo lo anterior, podemos afirmar que el campesinado mexicano continúa en la búsqueda de un proyecto de organización verdaderamente autónomo y democrático, que por su fuerza, capacidad de movilización y

propuesta se convierta en interlocutor respetado por instancias gubernamentales y por el movimiento popular.

4. LOS PROYECTOS REGIONALES Y SECTORIALES EMERGENTES

En varias regiones del país han surgido proyectos de organización campesina con una concepción más integral de las demandas agrarias y del desarrollo rural. Se trata de frentes regionales que han sabido combinar la movilización y diversas formas de presión política con el aprovechamiento de canales de negociación con el Estado que no ponen en riesgo su autonomía. Algunas de estas organizaciones forman parte de la UNORCA, otras son miembros u observadores de la CNPA y, otras más, no están articuladas a ningún frente nacional campesino. Algunos ejemplos de este nuevo tipo de organización campesina regional los ubicamos en Chihuahua (FDC), Guerrero (Coalición de Ejidos de la Costa Grande), Oaxaca (UCIZONI), Zacatecas (FLPZ), Veracruz (Huayacocotla y OCPIHV), Tlaxcala y Puebla (OCIR), Durango (UPEZ), Morelos (UPM).

Un reto para los proyectos de coordinación nacionales es el de lograr la unidad de todas esas nuevas organizaciones, no bajo la lógica de incorporarlas a su seno, sino de integrar, junto con esas organizaciones y algunas otras, un nuevo frente de lucha que rescate las mejores experiencias del movimiento campesino mexicano. De no avanzar en un sentido más unitario y plural junto con estas fuerzas, las coordinadoras, uniones y centrales nacionales se irán aislando hasta desaparecer.

Las coordinadoras sectoriales representan el nuevo tipo de agrupaciones que podrían consolidarse en los años noventa. Hasta hoy, la más desarrollada es la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), que agrupa a unas 30 organizaciones regionales de productores de café de siete estados de la República, y cuenta con unos 40 mil productores afiliados.

El protagonismo de esta coordinadora va más allá de la gestoría y la comercialización del café. La CNOC es actualmente la principal organización social del sector cafetalero y ha inaugurado una nueva forma de articulación del movimiento campesino, basada en la acción conjunta ante problemas comunes, el apoyo mutuo, el respeto a la autonomía y la pluralidad política.

La CNOC ha mantenido una interlocución permanente con las dependencias relacionadas con la producción y comercialización del café; ha hecho propuestas y planteamientos concretos y viables, y ha mantenido una lucha constante por romper inercias y obstáculos burocráticos. Asimismo, ha logrado canales de exportación del café a varios países de Europa y Norteamérica, a través de la primera empresa campesina comercializadora, la Promotora Comercial de Cafés Suaves Mexicanos, S.A de C.V.

En abril de 1990, la CNOC fue anfitriona del Congreso Constitutivo de la Unión de Pequeños y Medianos Productores de Café de Centroamérica, México y el Caribe, en la que participaron organizaciones de siete países.

Existe otro proyecto sectorial que se articuló en torno a la cuestión étnica, y que es el Foro sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indios, impulsado por organizaciones como UCIZONI, el FIPI, así como por organizaciones campesinas y no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a apoyar al movimiento campesino e indígena. Este frente constituyó el Consejo Mexicano 500 Años de Resistencia India y Popular que desarrolló un programa de lucha, en coordinación con organizaciones latinoamericanas, europeas y de América del Norte, cuya etapa principal culminó en octubre de 1992.

Por otro lado se integró la Red Forestal impulsada por la UNORCA, que agrupa a ocho uniones de ejidos forestales de otros tantos estados del país. En la medida en que el proyecto se abra a una mayor pluralidad y represente con eficacia y honestidad los intereses de ese subsector, podrá convertirse en el organismo autónomo más importante y fuerte de la rama forestal.

En torno al abasto popular se ha articulado un gran número de organizaciones urbanas y rurales a lo largo de encuentros, foros y talleres. Los días 16 y 17 de junio de 1990, se realizó en la ciudad de México el Primer Encuentro sobre la Política de Modernidad y el Abasto Popular, en el que participaron 38 organizaciones de consumidores del Valle de México, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, así como la Regional de Mujeres de la CONAMUP, la Cooperativa Campo-Ciudad, la Cooperativa de Tepepan, la Unión de Colonias Populares, el Instituto Maya, el Equipo Pueblo y otras organizaciones. Este encuentro representó el antecedente más significativo del actual proceso de convergencia de organizaciones urbano-populares, sindicales y campesinas en el gran frente de masas conocido como Pacto contra el hambre, cuyas movilizaciones más importantes se realizaron, por un lado, el 19 de septiembre y, por el otro, el 16 de octubre, Día Internacional de la Alimentación, las dos en el año de 1990.

Este movimiento está facilitando la articulación e intercambio directo y sin intermediarios entre productores campesinos y consumidores de la ciudad mediante la autogestión y la cooperación.

5. PERFIL DEL MOVIMIENTO CAMPESINO DEL AÑO 2000

Dos años después de iniciado el proyecto neoliberal del régimen salinista, ya podían advertirse buena parte de sus resultados en el campo. Objetivo toral de la política de Carlos Salinas de Gortari ha sido el de legitimarse y recomponer la deteriorada imagen presidencial, tras el proceso electoral más cuestionado de los últimos años. El proyecto salinista de modernización y el llamado a la concertación con un discurso de "solidaridad", puede contar entre sus logros con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE), el Congreso Agrario Permanente (CAP), la renegociación de la deuda externa, la estabilidad cambiaria, la reprivatización de empresas paraestatales y la banca, la eficiencia tecnocrática y, sobre todo, el haber evitado un estallido social.

Pero veamos el costo social de la modernización y de la relativa paz social del país. A pesar de que cerca de dos millones de ejidatarios y comuneros sembraron en 1989 alrededor de 60% del maíz, frijol y arroz cultivado en México, con altos costos de insumos y servicios, con tecnología atrasada y en tierras de mala calidad, en cada vez peores condiciones de salud y con un hambre creciente, los tecnócratas del régimen —culpables de la actual crisis alimentaria—, los condenan a una mayor pobreza excluyéndolos del actual proyecto modernizador que privilegia a los agricultores privados que abandonaron la producción de granos básicos y que son los verdaderos causantes de la crisis alimentaria.

El hecho de mantener a más de 40 millones de mexicanos en la pobreza; la súbita reducción del presupuesto para el desarrollo rural impuesta por el Fondo Monetario Internacional; la renuncia del régimen a la autosuficiencia alimentaria a cambio de arrojar al país a una mayor dependencia del exterior; la drástica reducción de la cantidad y calidad de alimentos fundamentales en la dieta de los mexicanos; la alarmante desnutrición de más de la mitad de la población, que a sólo un año de instaurado el PECE perdió siete gramos de proteínas y 222 calorías diarias y, finalmente, la violación constante de los derechos humanos y la violencia oficial ejercida en contra de quienes exigen respeto al voto popular, son algunos de los rasgos que definen la política de modernidad del gobierno de Salinas. Obviamente, esta política no muestra ningún rasgo de la solidaridad que el régimen pregona.

En el aspecto agrario, la tendencia inequívoca del modelo de desarrollo rural sostenido por los gobiernos priístas ha sido la de cancelar el reparto y reprivatizar las formas de propiedad social de la tierra, es decir, el ejido y la comunidad agraria, tal como se ha venido haciendo con empresas paraestatales de los diferentes sectores productivos y de servicios.

El impulso de la agroexportación de cultivos comerciales de alta rentabilidad, en beneficio de la burguesía rural, es congruente con la estrategia de incremento a la importación de alimentos básicos y de reducir a los campesinos pobres a la producción de granos baratos para sostener a su costa el PECE. En 1990, según cifras oficiales, se habrían importado 11.7 millones de toneladas de productos agropecuarios, cifra muy superior a la de 1989 que fue de 9.9 millones de toneladas. En términos monetarios, las importaciones de 1989 habrían costado 2 000 515 millones de dólares y las de 1990, 3 000 206 millones de dólares. Tan sólo en granos básicos y forrajes, las compras de 1990 habrían ascendido a 6.6 millones de toneladas (véase diario *La Jornada*, 15-09-90).

En el terreno de la comercialización y el abasto, lo más destacado de la política de modernización ha sido la liberación de precios de granos básicos y la tendencia a desaparecer los precios de garantía (sólo se mantienen los del maíz y frijol). El precio diferenciado para maíz blanco y amarillo, más que a los productores campesinos, beneficiará a los grandes productores que tienen la posibilidad de elegir la variedad más rentable. La política de precios del programa de modernización del campo prevé que la integración a los mercados internacionales (ingreso al GATT y Tratado de Libre Comercio con Estados

Unidos y Canadá), contribuirá a la redistribución del ingreso en favor del productor del campo. Salvo en los casos de los empresarios agrícolas y exportadores, esta meta es totalmente ilusoria para los pequeños productores, quienes no pueden ser competitivos en el plano internacional, cuando muchas veces ni siquiera recuperan sus costos de producción debido a la falta de capacitación y al encarecimiento constante de insumos y servicios. El establecimiento de la bolsa agropecuaria es otro elemento modernizante que favorecerá sin duda a los especuladores y grandes productores, éstos sí altamente modernizados.

La década de los noventa se inició con una sociedad rural económicamente polarizada, con una política neoliberal que acentuará las desigualdades sociales, pero también con una sociedad civil que se organiza, con un movimiento campesino más consciente, con agrupamientos rurales que han consolidado su autonomía y que han desarrollado su capacidad de autogestión.

Asistimos a los albores del siglo XXI con muchos temas por debatir, y cuyo esclarecimiento dará sustento teórico y político a un nuevo movimiento campesino. Algunos de esos temas son: la privatización del ejido, y con ello nuevos cambios en la legislación agraria; el futuro del campesinado en el marco de la modernización prometida; el adelgazamiento del Estado y las nuevas vías de capitalización en el campo; el problema alimentario; el abasto popular y la nutrición; las formas de apropiación campesina del proceso productivo y distributivo, así como la integración horizontal y vertical de estos procesos. Finalmente, la organización autónoma; la democracia autogestionaria en el campo; la unidad del movimiento campesino, y la adopción de criterios de evaluación respecto a los anteriores objetivos, son aspectos de los que habrán de ocuparse investigadores, académicos y dirigentes campesinos en el futuro inmediato.

En relación con la cuestión de la privatización del ejido ya se perfilan posiciones. Tanto funcionarios del sector agropecuario como improvisados y no solicitados "defensores" de los campesinos, ya han lanzado sus sesudas y espectaculares propuestas. Todos ellos han recurrido al análisis teórico y a la historia de otras sociedades en el mundo, para fundamentar su propuesta de asociar a los campesinos con la iniciativa privada, con objeto de que el ejido se abra al flujo del capital nacional e internacional, mostrando orgullosamente ejemplos como el de la galletera Gamesa en Nuevo León y de otras grandes empresas en las que los ejidatarios han aceptado dicha asociación. Algunos de los enterradores del ejido que argumentan ineficiencia para dictar su acta de defunción, no reparan en las causas políticas y los factores socioeconómicos que han distorsionado los objetivos de la institución ejidal y que la han llevado a la marginación económica y social. Poco importante les parece el papel que en ello han desempeñado la estatización y corporativización del campesinado a través de las instituciones y organizaciones oficiales. Tampoco se ocupan de lo que representa económica y socialmente para los campesinos pasar a la condición de

proletariado urbano, ni la condición de explotadores que ostentan quienes se han quedado con las tierras de que fueron despojados.

Quienes verdaderamente conocen la situación en el campo mexicano pueden dar testimonio de los ejidos saqueados por caciques y funcionarios corruptos, manoseados y manipulados por ambiciosos políticos priístas; de organizaciones de productores ejidales y comunales que se han descorporativizado para poder emerger como una alternativa de desarrollo con base en la autonomía y la democracia autogestionaria. Si muchas de estas organizaciones en las que intervienen campesinos pobres, no han logrado mayores avances y aportaciones al desarrollo regional y a la solución del problema alimentario, es por los obstáculos y la intransigencia que han encontrado en la burocracia política.

Sin embargo, la defensa del ejido ante la privatización no puede basarse ni sustentarse únicamente en su pasado heroico, ni en su rentabilidad o competitividad como empresa social, sino también en su carácter de comunidad agraria, que nace de la organización social y de la cultura mexicana. Hay que defenderlo en tanto forma jurídica de tenencia de la tierra pero, sobre todo, en tanto forma de propiedad social de ésta, con sus recursos naturales y valores culturales. En la medida en que el ejido y la comunidad logren superar sus actuales limitaciones y obstáculos, serán una alternativa capaz de organizar en forma democrática e integral la producción y la vida social y cultural en el campo mexicano.

El movimiento campesino de la década de los noventa tiene grandes perspectivas, pero también retos muy complejos. Hoy más que nunca está llamado a reafirmarse como sujeto histórico del cambio social. Si hace diez años se inició la quiebra del corporativismo estatal, cuando los sectores marginales se colocaron en el centro, hoy, los recientes movimientos campesinos autónomos están creando nuevos consensos regionales, sectoriales y nacionales respecto de la apropiación del proceso productivo y de la vida social, cultural y política por parte de las organizaciones.

A un tercio del sexenio salinista, el romance de la concertación, sobre todo con el CAP, se daba por terminado. La consolidación y "legitimación" del régimen y la falta de recursos han conducido a un mayor endurecimiento de su política, aun con las organizaciones campesinas más identificadas con el actual gobierno. Ahora el "regateo" será más tenso entre éste y las organizaciones campesinas. Las que habían privilegiado la concertación y relegado la movilización, tuvieron que combinar ambas, como lo demuestran las marchas-caravanas iniciadas en la segunda quincena de septiembre de 1990, por campesinos miembros de la CIOAC, la UGOCP y la UNORCA.

La combinación de movilización con negociación es ya un elemento táctico del movimiento campesino independiente y, por otro lado, la concertación, propuesta hasta hoy por el gobierno, no es una concesión graciosa, sino el resultado de la lucha, llena de dificultades y sufrimientos, que los campesinos han sostenido durante largos años. Los hechos recientes demuestran que la confrontación no es una necedad o un vicio contestatario, sino una forma de lucha que la intransigencia institucional ha impuesto a los campesinos.

Independientemente del grado y tipo de convergencia o divergencia política con el Estado y de que éste les haya impuesto la lucha, todas las organizaciones sociales han aprendido en mayor o menor medida a combinar la movilización y la presión con la negociación y los acuerdos. Por ello será necesario insistir ante el Estado en la negociación y el acuerdo también en el terreno del disenso.

Concertar desde la divergencia —afirma Armando Bartra— es la única forma civilizada de transitar al cambio estructural, mientras que una alianza real, que soslaye antagonismos, puede ser cómoda y aun productiva para algunos en el corto plazo: pero en términos estratégicos y globales es impracticable (Bartra, Armando, prólogo al libro de Gustavo Gordillo *El Estado, mercados y movimiento campesino*).

De acuerdo con las condiciones actuales, la perspectiva histórica de la negociación de los campesinos con el gobierno se dará más desde la oposición que desde la “alianza”.

En este sentido, el mismo autor señala que:

Cuando la oposición política deviene en movimiento de masas, las reivindicaciones sociales se politizan y los proyectos reformistas sustanciales tienden a plantearse menos en la alianza y más en la oposición. Una oposición nueva, menos dogmática y principista, más plural y concertadora, menos sectaria y más masiva, pero oposición al fin (*ibidem*).

Habría que agregar que lo decisivo en los cambios estructurales y estratégicos es la alianza pactada entre organizaciones sociales y políticas, no la de éstas con el Estado.

En el futuro próximo, sin embargo, el pacto entre el movimiento popular y los partidos políticos tendrá que darse bajo nuevas reglas del juego. Con el derrumbe del corporativismo oficial, del dogmatismo de la izquierda y el surgimiento de un nuevo movimiento social que ejerce y construye la democracia desde abajo, que sustituye a la burocracia por la autogestión, los partidos políticos tienen más que aprender que enseñar. Hoy, la democracia que se construye desde la colonia, la comunidad rural o el sindicato, deberá llegar en primer lugar a los partidos políticos, si es que en realidad queremos fortalecer la autonomía y cerrar el paso a un neocorporativismo que aun si fuera de “izquierda” no dejaría de ser opresivo.

El proyecto salinista, lo mismo que el de sus antecesores, está dirigido a una parte minoritaria de la población rural y urbana; la mayoría queda excluida, y para que el sector “extremadamente pobre” de ésta no muera de hambre, se echan a andar programas de excepción como el Pronasol, el cual se propone redimir a ese sector, pero también corporativizarlo bajo el control del partido oficial.

Ante un proyecto modernizador en el que la mayoría no cabe, son las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, es decir, la sociedad civil, la que tendrá que desarrollar las más variadas for-

mas de sobrevivencia y de vivencia. La democracia y la participación en muchas organizaciones autónomas constituyen bases firmes para la elaboración y desarrollo de proyectos integrales, para la apropiación autogestionaria de todo el circuito producción-comercialización, abasto y nutrición. La puesta en práctica de esta cadena se dará la próxima década, bajo la lógica de la cooperación entre productores y consumidores, entre la ciudad y el campo.

En este marco, las organizaciones campesinas también tendrán que definir su papel; aquellas que aún mantienen un pie en el campo independiente y autónomo y otro en las instituciones oficiales, deberán definir su posición frente al Estado. Asimismo, es impostergable buscar la convergencia de los campesinos territorializados con los asalariados rurales e incluso con los socializantes de tierras. Aquellas organizaciones que rompan el vínculo con estos sectores marginados y que no los tomen en cuenta en sus proyectos y propuestas, le estarán haciendo el juego a la política neoliberal, apoyando la polarización social y la exclusión de un numeroso sector de mexicanos.

Mediante la manipulación oficial del reparto agrario durante varias décadas, el Estado logró mediatizar y eliminar a un sector importante del campesinado pobre; ¿podrá lograrlo ahora con la misma eficacia mediante la manipulación de recursos financieros y otras concesiones objeto de concertación? Creemos que hoy será más difícil, por lo menos en los sectores más conscientes, mejor organizados y con capacidad de autogestión. Muchos campesinos claman: “ya no queremos dádivas ni limosnas, queremos justicia y que se nos respete, que se reconozca realmente nuestra mayoría de edad por parte del Estado”. En otras palabras, los campesinos exigen respeto a la autonomía de sus organizaciones, no entorpecimiento burocrático de la autogestión, ni condicionamiento político del financiamiento e inversiones en el campo.

Una parte importante del movimiento campesino ha logrado avances en la democracia económica; sin embargo, ésta se enlaza inevitablemente con la democracia política; es decir, los conflictos agrarios, la lucha de los productores y de los asalariados rurales, no pueden ser ajenos a procesos políticos y, en general, a la lucha por el poder.

Con el surgimiento en 1988 de la oposición cardenista, algunos movimientos populares, antaño opuestos a la participación en procesos electorales, tienen actualmente alianzas en este terreno con partidos de la oposición. De aquí al año 2000 se realizarán cuatro procesos electorales federales, incluyendo dos elecciones presidenciales y elecciones estatales y municipales, en las que los productores y trabajadores rurales tendrán un protagonismo cada vez mayor.

Si bien la participación electoral es una forma importante de ejercer la democracia, ésta no se construye sólo en las urnas. El campesinado es portador histórico de las más ricas y variadas formas de democracia directa, así como de prácticas de ejercicio del poder entendido como servicio a la comunidad. Las instituciones tradicionales como el tequio, la faena, la ronda y otros servicios, son formas de cooperación practicadas por los pueblos indios desde tiempos lejanos. Asimismo, el consejo, el cabildo, el plebiscito y la asamblea como formas de

elección directa de autoridades y de lograr consensos populares, cuando han sido retomados por el movimiento campesino actual, han permitido recuperar y defender sus tierras y otros recursos; democratizar ejidos, comunidades, municipios y otras instancias de poder.

Pondremos fin a estas reflexiones señalando que los noventa serán años de un gran protagonismo de las organizaciones populares, campesinas e indígenas en un mundo de sorprendentes y rápidos cambios económicos y políticos.

En la última década del siglo XX, el movimiento campesino mexicano se enfrentará a nuevas realidades y desafíos que exigirán otras estrategias y novedosas formas de lucha. En el plano internacional, la emergencia de nuevos bloques económicos y la apertura e integración de nuevos mercados, planteará a los productores agropecuarios la creación y capacitación de equipos de trabajo altamente especializados, así como el empleo de instrumentos modernos para la producción, la comercialización, el abastecimiento de insumos y alimentos. Ya no se podrá prescindir del análisis permanente de la coyuntura internacional.

En el ámbito nacional, es vital la defensa del ejido y la lucha por liberarlo de su condición de aparato de Estado, para convertirlo en una alternativa real de desarrollo económico y social, y en la base de un nuevo poder democrático y autogestionario a la altura de los nuevos tiempos. Será necesario seguir fortaleciendo la autonomía de las organizaciones campesinas, su participación en las instancias donde se discuten y elaboran las políticas dirigidas hacia el campo; será impostergable la multiplicación de y el apoyo a los procesos democratizadores locales, estatales, nacionales e internacionales, Sólo así el campesinado logrará avances en la lucha por la soberanía alimentaria, por el mejoramiento de la calidad de vida y del medio ambiente.

El nuevo movimiento campesino y popular también deberá estar presto a combatir desviaciones que comienzan a observarse, tales como el asistencialismo, el aparatismo, la burocracia en las organizaciones, las formas neocorporativas y la compra-venta de legitimidad e interlocución, tan nefastas como la intermediación financiera y el caciquismo.

Para el siglo XXI se espera un movimiento campesino abierto a todas las demandas sociales y a todas las formas posibles de acción, bajo una concepción integral del desarrollo rural; capaz de elaborar un proyecto campesino diferente al del Estado, surgido del coraje de tantos años de marginación y represión, pero también de la creatividad y la esperanza de una sociedad más justa y democrática. Tales son los retos para el movimiento campesino en la presente década y tales son las perspectivas para un nuevo siglo de realizaciones y de grades transformaciones sociales.

ANEXO

LAS 10 ORGANIZACIONES CAMPESINAS FIRMANTES DEL CAU

1. Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC)
2. Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA)
3. Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP)
4. Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
5. Central Campesina Cardenista (CCC)
6. Comisión Organizadora de la Unidad Campesina (CODUC)
7. Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA)
8. Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCH)
9. Coordinadora Nacional de los Pueblos Indios (CNPI)
10. Movimiento Nacional Plan de Ayala (MNPA)

LOS 12 INTEGRANTES DEL CAP

1. Alianza Campesina del Noroeste (ACN)
2. Central Campesina Cardenista (CCC)
3. Central Campesina Independiente (CCI)
4. Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC)
5. Comisión Organizadora de la Unidad Campesina (CONDOC)
6. Confederación Agrarista Mexicana (CAM)
7. Confederación Nacional Campesina (CNC)
8. Movimiento Social de los 400 Pueblos (MP-400)
9. Unión General de Obreros y Campesinos de México-Jacinto López (UGOCM-Jacinto López)
10. Unión General Obrera, Campesina Popular (UGOCP)
11. Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA)
12. Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA)